

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **ANA MILENA LOZANO CIFUENTES** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A.** (en adelante COLFONDOS S.A.), tramitado bajo el radicado No. **05001-31-05-017-2022-00168-01**.

AUTO

De conformidad con la escritura pública No. 1246 del 24 de julio de 2023, allegada vía correo electrónico junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por parte de COLPENSIONES, para que represente a esta entidad, se procede a reconocer personería como apoderada principal a la UNION TEMPORAL FUERZA LEGAL TÉCNICA con Nit 901.729.276-4, y como apoderada sustituta, a la abogada SANDRA MILENA NARANJO SALAZAR con TP 225.677 del C.S. de la J.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos,

1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata la actora que nació el 25 de julio de 1970, y que inició a cotizar en el RAIS en septiembre de 1997, en la AFP COLFONDOS S.A.

Expone que la AFP COLFONDOS S.A. le brindó una asesoría en la que no tuvieron en cuenta las sus condiciones particulares, pues se limitaron a informar sobre la rentabilidad y las fluctuaciones del mercado que podrían dar lugar a una excelente pensión con diversos beneficios económicos, sin embargo, no le explicaron de manera clara y precisa, los riesgos y beneficios que corría al estar afiliada al RAIS frente al RPM, pues el traslado se realizó sin informarle el monto de la mesada pensional en el RAIS y, que la obtención de esta solo obedece al capital ahorrado.

Indica que presentó derecho de petición a COLFONDOS S.A., solicitando las pruebas de la asesoría y reasesoria brindada, igualmente solicitó a COLPENSIONES la afiliación al Sistema General de Pensiones y la autorización del traslado del régimen, entidad que le respondió que se encontraba a menos de 10 años de la edad para pensionarse, por lo que no era procedente tal solicitud.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La *a quo* despachó favorablemente las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS y ordenando en consecuencia a la AFP COLFONDOS S.A. a trasladar a COLPENSIONES dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, los recursos de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo para el efecto el capital, sus rendimientos, los gastos de administración, las cuotas de seguros previsionales y los recursos del fondo de garantía de pensión mínima. Asimismo, ordenó a COLPENSIONES a activar la afiliación de la demandante al RPM, y a recibir dichos dineros, y reflejarlos como semanas en la historia laboral de la accionante.

Para fulminar la condena, la *a quo* argumentó que este es un caso especial, pues no se debe analizar si se vulneró o no el derecho a la información como en otros casos, pues lo que en realidad se debe analizar es si la actora, estuvo validamente afiliada al RAIS, encontrándose que con el dictamen grafológico practicado, las huellas y las firmas de la demandante en el formulario de la afiliación del año 2014, no corresponden a ella, por lo que no es tema de ineficacia por falta al deber de información, sino que la demandante nunca se afilió en el año 2014 a COLFONDOS S.A., teniendo en cuenta que la afiliación tiene que ser libre y voluntaria, pues la demandante al desconocer que

se había afiliado a dicha AFP en el año 2014, sin haber firmado el formulario de afiliación, se entiende que nunca manifestó su deseo de afiliarse.

Finalmente, declaró no probadas las excepciones propuestas por las demandadas, condenó en costas a COLFONDOS S.A. absolviendo de las mismas a COLPENSIONES.

La sentencia no fue apelada, motivo por el cual se envió el expediente ante esta Corporación judicial con el fin de que surta el grado jurisdiccional de Consulta del fallo, en favor de Colpensiones.

3. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, únicamente COLPENSIONES allegó escrito de alegatos en los siguientes términos:

“Señores magistrados, me permito presentar alegatos de conclusión en el proceso promovido por la señora ANA MILENA LOZANO CIFUENTES en la cual se condenó a la AFP COLFONDOS a devolver a la demandante al RPM el día 6 de MARZO de 2032 y a COLPENSIONES a recibir al demandante nuevamente en el régimen de prima media con prestación definida la cual fue objeto de apelación, por lo que le solicito respetuosamente analizar los siguientes conceptos:

Sea lo primero solicitarles analizar nuevamente lo referente a la imposibilidad de traslado de régimen impuesta por el legislador en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modifico el literal E del artículo 13 de la ley 100 de 1993 y estableció claramente que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren menos de 10 años para adquirir su pensión de vejez, supuesto jurídico en el cual nos debemos basar en el caso en concreto toda vez que la parte demandante solicito el traslado posterior al cumplimiento de la edad limítrofe establecida, por un descuido imputable al mismo.

Motivo por el cual ahora se pretende la declaración de ineficacia por la parte demandante al ver que no le queda otra alternativa conforme a los supuestos normativos ya referenciados y por tal decidió optar por demanda bajo la figura jurídica que hoy nos ocupa la cual fue creada con el ánimo de proteger a la personas realmente afectadas y convirtiéndose a hoy en el camino de salida para todos aquellos que tomaron una decisión en su momento y que al considerarla no acertada patrimonialmente pretenden sanearlo, debiéndose aclarar con el mayor respeto que

es claro que el único interés recae sobre el beneficio económico que se puede obtener el Régimen de Prima Media al momento de pensionarse, lo que claramente no es un fundamento legal para que se concedan la pretensiones invocadas tal y como lo hizo el juzgador en primera instancia.

Ahora bien, la ineficacia invocada recae sobre un presunto error al que la parte actora fue inducida en razón a su desconocimiento, para lo cual se solicita al despacho tener de presente que el error, fuerza y dolo, es decir, los vicios del consentimiento deben ser probados, no simplemente referenciarse que los mismos se presentaron. En el caso en concreto el engaño invocado no se encuentra válidamente acreditado, ni con el soporte probatorio documental ni con los testimonios brindados, por lo que la ineficacia de traslado invocada carece de viabilidad, la mera afirmación de la parte actora de lo que aconteció hace tantos años al momento de su traslado al Régimen de ahorro individual no puede ser tomado como cierto absolutamente ya que como se dijo han pasado muchos años y se desconoce qué fue lo que realmente aconteció, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ese traslado y más aún que no se cuenta con la presencia del respectivo asesor del fondo privado, tomar una decisión en dicha magnitud resulta incluso arbitrario y contravía principios legales y constitucionales como la seguridad jurídica y el debido proceso, está establecido como regla general en derecho que la buena fe se presume y la mala fe se prueba y en el caso en concreto no quedo probada mala fe por ninguna de las partes, pero la buena fe solo se le reconoce a la parte actora existiendo claramente un vacío en la decisión adoptada por el Juzgado en primera instancia.

El artículo 1502 del código civil claramente establece lo que es el consentimiento, el cual según el desarrollo del proceso no se ha logrado probar que allá sido violentado y por tal viciado de ineficacia alguna.

La parte actora es una persona plenamente capaz según el artículo 1503 del código civil, ya que en el plenario no se acreditó lo contrario, que la misma bajo sus facultades de forma libre y espontánea suscribió una afiliación considerando que sería más favorable pensionarse con el fondo privado y posteriormente al enterarse de que había perdido beneficios procede a reclamar unos derechos como se indicó anteriormente bajo una modalidad judicial creada por nuestro legislador para las personas verdaderamente perjudicadas.

Es importante resaltar en este punto que el desconocimiento de la ley en Colombia no excluye de responsabilidad y no se logró probar que hubiese un engaño o coerción por parte de los asesores del fondo privado y por el contrario existe un gran vacío al respecto. Así pues, el error alegado y aceptado por el Juez quinto Laboral claramente se desvirtúa, no existe prueba que permita tener como cierto lo afirmado en la demanda.

Ahora bien, si esta honorable corporación considera procedente la teoría de la ineficacia concedida por el aquo, se solicita se ordene al fondo privado la devolución de aportes, rendimientos, gastos de administración y cualquier otro rubro recibido en razón a la afiliación que se está declarando ineficaz, lo anterior a raíz de que si el afiliado no va a hacer uso del fondo es claro que no tiene que quedarse el mismo con ningún monto máxime teniendo presente que el traslado efectuado se declaró ineficaz por lo que los efectos surtidos quedan sin valor alguno; Igualmente, es importante que ustedes señores magistrados tengan presente al momento de fallar que la entidad que represento es de orden público y va entrar en un detrimento patrimonial si debe reconocer una pensión de vejez sin recibir todos los rubros válidamente cotizados por el afiliado en el tiempo que duro su vínculo con el Régimen de Ahorro individual.

Para lo anterior se solicita tener presente sentencias muy recientes de la Honorable Corte Suprema de Justicia que regulan al respecto, tales como las SL 1421, SL 1452 y SL 1688 todas del año 2019.

Donde se indica que no es procedente imponer cargas económicas adicionales a COLPENSIONES y más cuando su actuar siempre se ha regido por el principio legal y constitucional de la buena fe y entre sus funciones no se encuentra retener a sus afiliados, por lo que todo lo acontecido en razón al traslado de régimen de la parte actora no puede ser atribuido bajo ninguna perspectiva a esta entidad, ni se le puede imponer cargas insostenibles, motivo por el cual se reitera la solicitud de devolución de todos los rubros.

PETICIONES

Así las cosas, se solicita en primer lugar revocar la sentencia de primera instancia declarando prosperas las excepciones presentadas por la entidad que represento y por tal improcedentes las peticiones de la demanda por no ser procedente la ineficacia invocada y en segundo lugar, de forma subsidiaria se solicita en el caso de prosperar

la ineficacia, se ordene la devolución de todos los rubros percibidos por el fondo privado sin importar el concepto a que se refieran en razón a las cotizaciones efectuadas por la parte actora, incluyendo con ellas las devolución de los gastos de administración así como todo lo descontado por pólizas provisionales debidamente indexado.”

4. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad de la AFP COLFONDOS S.A. del año 2014, presentó alguna irregularidad que dé lugar a su ineficacia o inexistencia.

En caso de prosperar la pretension de ineficacia o inexistencia de la referida afiliación, habrá de definirse la forma en que se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS de la AFP COLFONDOS S.A. por la demandante.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

5. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007, se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES, por haberle resultado adversa, por lo que la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Sea lo primero analizar que la demandante inició su afiliación al sistema de seguridad social en pensiones, en el RPM administrado en su momento por el SEGURO SOCIAL hoy COLPENSIONES el 14 de marzo de 1991, como se desprende de la historia laboral aportada por la accionada en su repuesta a la demandada, folios 43 a 53 del archivo digital (07ContestacionDemandaColpensiones). Posteriormente, en el expediente obra formulario de afiliación de la actora al RAIS, a través de la AFP COLFONDOS S.A. el 25 de agosto de 1997, haciendose efectivo el traslado el 1 de octubre de 1997, como se registra en el certificado del SIAFP que reposa a folio 23 del expediente (06ContestacionDemandaColfondosI).

Luego la actora retorna a COLPENSIONES el 20 de enero de 2005, con efectividad a partir del 1° de marzo de 2005, como se registra en el citado certificado del SIAFP. Subsiguientemente, aparece un formulario de afiliación de la actora nuevamente a COLFONDOS S.A. el 20 de agosto de 2014, el cual milita a folio 24 del expediente (06ContestacionDemandaColfondos), con efectividad a partir 1° de octubre de 2014, siendo esta última afiliación, el tema objeto de la decisión de la juez de primera instancia, a pesar que la demanda iba dirigida a que se declarara la nulidad o ineficacia de la afiliación que realizó la actora al RAIS a través de la AFP COLFONDOS S.A. en el año 1997.

Concluyó la juez que como se probó, que la firma y huella que aparece en dicho formulario del año 2014, no corresponde a la de la demandante, declaraba la ineficacia de tal afiliación.

Y es que a pesar que en la demanda nada se dijo de falsedad en el formulario de afiliación de la actora del año 2014 a COLFONDOS S.A., la falladora de primera instancia, luego de escuchar el interrogatorio de parte de la demandante (minuto 37:10), en el que manifestó que no había suscrito dicho formulario, la juez consideró que era necesario que la AFP COLFONDOS S.A. realizará un cotejo de firmas, razón por la cual Colfondos S.A. dando cumplimiento a la orden judicial, procedió el 23 de febrero de 2023 a emitir el informe de cotejo de firmas inserto en el archivo digital (34RespuestaCotejoFirmas) en el que concluyó resumidamente que la firma de la demandante que aparece en el formulario de afiliación del año 2014, no es de su autoría, y la huella tampoco corresponde a la de ella, acogándose la juez a este informe y determinando que la firma del formulario era falsa, por lo que declaró la ineficacia del traslado bajo los presupuestos del artículo 271 de la ley 100 de 1993.

Frente a lo anteriores, encuentra la Sala que, en efecto, conforme al dictamen ordenado por la juez, se concluye que la firma que aparecen en el formulario de afiliación de la actora a la AFP COLFONDOS S.A. en el año 2014, no es de su autoría, y la huella tampoco corresponde a la de ella, (34RespuestaCotejoFirmas), por lo que se puede determinar que tal formulario comporta una falsedad, lo que conduce a que tal afiliación sea inexistente, y aunque la juez declaró su ineficacia, esto en realidad en nada afecta COLPENSIONES en favor de quien se surte la consulta del fallo de primera instancia, por este será confirmado respecto de esta decisión.

De otra parte, en lo que tiene que ver con las sumas que deben ser devueltas a Colpensiones como consecuencia de la declaratoria de ineficacia ya ferida, encuentra la Sala que dispuso la *a quo* que debía ser devueltos a Colpensiones por

parte de la AFP COLFONDOS S.A., los recursos de la cuenta de ahorro individual, incluyendo el capital, sus rendimientos, los gastos de administración, las cuotas de los seguros previsionales y los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Así las cosas, la decisión de la *a quo*, no se encuentra del todo acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia, y por tal razón, la misma debe ser ADICIONADA, para declarar que la devolución que debe realizar COLFONDOS S.A. a COLPENSIONES deberá incluir la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro de Fogafín durante el tiempo que legalmente se haya descontado de la cotización, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole, lo que se precisará en sede de consulta, pues al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este** y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiese recibido la AFP demandada como cotización de la demandante, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

Así lo dispone el art. 1746 del C.C., según el cual, “La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”.

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019, en la que precisó:

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la actora , como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba la actora antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuando le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante recordar que al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe o de una buena gestión en la administración del bien, que ninguna suma quede por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de la AFP, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, la que acarrea como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deba asumir con su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

Ahora, frente a la afirmación en los alegatos de COLPENSIONES, sobre la imposibilidad de traslado de régimen impuesta por el legislador en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modificó el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, cuando le falten al afiliado menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de vejez, es palmario que tal prohibición, se aplica en los casos de traslado voluntario, que no es lo que pretende la actora, sino la ineficacia de su afiliación inicial al RAIS.

En lo concerniente a la solicitud de la apoderada de COLPENSIONES en los alegatos de esta instancia, en el sentido que de prosperar la ineficacia, se ordene la devolución de todos los rubros, incluyendo los gastos de administración y lo descontado por pólizas provisionales debidamente indexado, esta Sala considera que es procedente,

por cuanto este porcentaje de las cotizaciones no fue abonadas a la cuenta de ahorro pensional de la demandante, por lo que no devengaron los rendimientos o intereses pues fueron apropiados por las AFP o gastados para los pagos de las primas, y por ello debe ser devuelto indexado, por lo que así se decidirá en esta instancia.

Al respecto la jurisprudencia de la CSJ de la que se citan las sentencias SL1688 de 2019 SL 2932 de 2020, SL 3202, 3571, 3706, 3707, 3708, 3709 y 3769 de 2021, la CSJ ha ordenó que las cuotas de administración fueran devueltas indexadas.

Finalmente, respecto de la excepción de prescripción formulada por la AFP demandada al dar respuesta a la demanda, para esta Sala, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la SCL de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia consultada será CONFIRMADA y ADICIONADA, para en su lugar declarar la ineficacia de la afiliación, por los argumentos de la Sala en segunda instancia, en los términos anteriormente explicados.

SIN COSTAS en esta instancia por haberse conocido la sentencia en el grado jurisdiccional de CONSULTA.

6. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de marzo de 2023 proferida por el JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **ANA MILENA LOZANO CIFUENTES** contra **COLPENSIONES y COLFONDOS S.A.**, ADICIONÁNDOLA en el sentido de **DECLARAR** que la devolución que debe realizar COLFONDOS S.A. a COLPENSIONES, deberá incluir la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir, las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos

o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir, el 100% del valor de las cotizaciones, con sus intereses o rendimientos, indexando el porcentaje de la cotización que no fue consignado en la cuenta de ahorro pensional de la demandante.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **585359fb2ff399e9444b7dff55c962013d0bcade80768ac6c9f1b26a01df5b80**

Documento generado en 10/11/2023 03:08:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>